El 30 de marzo de **1995** el piloto aviador de Mexicana de Aviación, **Eduardo Torres Garci Crespo** fue ejecutado arbitrariamente por policías preventivos del Distrito Federal.

Se inició la **averiguación previa número 07/02491/95-03**, en la delegación Cuahutémoc, Departamento Uno, Agencia Investigadora 07 por los delitos de Homicidio Calificado y Abuso de Autoridad. Consignación con 3 detenidos, porque el 4º policía huyó a los Angeles California y fue extraditado 10 meses después, gracias a la intervención de Jesús Michel de Derechos Humanos Pueblo Nuevo, a la ex-asambleísta Margarita Zavala, a Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., a la Red Todos los Derechos para todos que reúne 43 organizaciones; Organismos internacionales como CEJIL, Amnistía Internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y a todos los medios de comunicación, sobre todo a Gutiérrez Vivó de Radio Red, fue posible denunciar la falsedad de declaraciones de 120 policías, la desaparición de pruebas como el arma y la cinta magnética, el encubrimiento por parte de la corporación policiaca, la intimidación a los 40 testigos, la inexistencia de recursos, la dificultad de acceder a las autoridades, etc.

El **2 de septiembre de 1996 se dictó sentencia, causa número 43/95**, por el Juez 4º de lo Penal Lic. Leonardo Pérez Martínez: "Primero: Luis Hernández Barrera, Rodrigo Parra Barzalobre, Alfredo Totozintle Peña y Jesus Angel Huerta Cerezo o Solis, son penalmente responsables en la comisión de los delitos de *Homicidio Calificado y Abuso de Autoridad calificado*, perpetrados en las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión que constan en autos. Segundo: por ello y por las peculiaridades de los sentenciados, este Tribunal de Decisión estima justo y equitativo imponerles una pena de **36 treinta y seis años 8 ocho meses 7 siete días de prisión** y 214 doscientos catorce días de multa, equivalentes a \$3,504.93, tres mil quinientos cuatro pesos con noventa y tres centavos, o en su defecto 214 doscientos catorce jornadas de trabajo en favor de la comunidad, misma que deberán purgar en términos del considerando VI del presente fallo..."

El **18 de febrero de 1997**, "VISTO para resolver el presente **Toca** número **968/96**, relativo al recurso de **apelación** que en contra de la sentencia: Se modifica el punto resolutivo "Por la comisión de los delitos de homicidio calificado (con ventaja) y abuso de autoridad calificado (servidor público perteneciente a una corporación policiaca), se estima justo y procedente imponerles una pena de **50 cincuenta años de prisión**, multa de cuatrocientos cincuenta días de salario mínimo general vigente, calculada a razón de \$16,34 lo que hace un total de \$7,353.00..." Así, por Unanimidad de votos lo resolvieron y firman los C.C. Magistrados integrantes de la Octava Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Licenciados Cesar Augusto Osorio y Nieto, Eduardo Alfonso

Guerrero Martínez y Gilberto Rodríguez González, siendo ponente el último de los nombrados, ante el secretario de acuerdos Licenciado Antonio Correa Mayen.

Después del Juicio Penal que dio como resultado, al cabo de dos años, una sentencia condenatoria contra los patrulleros responsables se inició el **26 de marzo de 1997**, con el Bufete Rivera Barrios un "**Juicio Ordinario Civil. Acción de Reparación del Daño Moral.** Torres Garci Crespo Eduardo (su sucesión) vs. Gobierno del Distrito Federal, representado por el Jefe del D.F".

"El juicio civil por daño moral se ha emprendido como una consecuencia lógica para garantizar algunas de las mínimas condiciones económicas para la familia de la víctima. El gobierno de la ciudad debió haber tomado la iniciativa de indemnizar financieramente a los familiares, al no hacerlo debemos recordarle que el Estado Mexicano adoptó el 29 de noviembre de 1985 la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. En el artículo 11 inicia: "Cuando funcionarios públicos u otros agentes actúen a título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas". Aplicar el rigor de la ley contra funcionarios que abusan del poder no debería ser un caso de excepción y las autoridades del D.F., deberían ser las principalmente interesadas en resolver éste y otros casos similares, con prontitud y diligencia, sin necesidad de un largo y costoso juicio. La credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones es lo que está en juego. Asunto no menor para los que pretenden gobernarnos". (firma David Fernández Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,A.C.).

Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil en el Distrito Federal, **expediente 412/97**, Jueza Lic. Margarita Cerna Hernández, **3 de octubre de 1997 dictó sentencia**, VISTOS, para resolver en definitiva los autos del Juicio Ordinario Civil, Acción de Reparación del Daño Moral, Resuelve: Primero. Ha sido procedente la vía intentada en la que la parte actora probó su acción y la demandada no justificó sus excepciones y defensas. Segundo. **Se condena al DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, a pagar a la parte actora la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS**, Moneda Nacional, por concepto del pago por daño moral, en su carácter de responsable solidario, para lo cual se le concede el término de cinco días, contados a partir de que cause estado esta sentencia.

El **8 de diciembre de 1997**, Vistos para resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte actora **toca 5358/97 y 5359/97 proyecto 1662 y 1663**, así como la codemandada por conducto de Teresa de Jesús Hernández Murcia (quien fue amonestada por la jueza en dos ocasiones por ofensiva y por rebeldía), en contra de la Sentencia Definitiva. RESUELVE: Segundo. **Se confirma la**

sentencia combatida. Tercero. **Se condena en costas de ambas instancias** al Departamento del Distrito Federal. Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran la Primera Sala del H Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Licenciados José Cruz Estrada, María del Socorro Vega Zepeda y José Luis Castillo Lavin, siendo ponente el primero de los nombrados.

El Departamento del Distrito Federal no interpuso el recurso de juicio de Amparo contra la resolución del juzgado. En consecuencia dicha sentencia ya está firme, ya causó estado y no es revocable, razón por la cual el demandado debe cumplir. El pronto pago de la indemnización ayudará a que la familia Torres Pérez Sandi integrada por la viuda y tres menores de edad puedan mudarse de domicilio.

Amenazas, asalto e intimidaciones.

En vísperas de darse sentencia contra los policías preventivos acusados de homicidio se recibieron aproximadamente 25 llamadas que advertían “**Lorena te van a matar**” además de insultos. Los hechos fueron denunciados ante la agencia investigadora 50 del Ministerio Público en la **averiguación previa: 50/AE/276/96-08**. Durante un tiempo se intervinieron las llamadas y hubo vigilancia de judiciales.

El **15 de septiembre de 1997 asaltaron la casa** de la familia Torres Perez Sandi, se presume fueron granaderos, con la participación de la empleada doméstica, toda la información y fotografías se entregaron al entonces subprocurador José Elías Romero Apis, a pesar de que se nos garantizó una investigación, no hubo tal.

Durante todo el mes de febrero de **1998**, la familia recibió **llamadas intimidatorias** supuestamente de parte de Victor Miguel Bautista Leal, uno de los policías que continúa en funciones y que fue testigo de los hechos. Es extraño pero el identificador de llamadas no detecta el número completo únicamente aparece en pantalla el número **3589**. El miércoles 25 de febrero, una mujer visitó a Lorena (viuda) en la escuela donde trabaja solamente para decir: “Ah, usted es Lorena Pérez Sandi”..

Responsable del escrito: **Mayra Pérez Sandi Cuen. Teléfono: 549 08 88**

ANEXO. Datos que constan en las actuaciones de 1995, de los "4" policías homicidas:

1.-Rodrigo Parra Barzalobre, 32 años, casado, secundaria, operador comandante de patrullas.

Domicilio: Huachinango, manzana 128, lote 7 bis, colonia del Mar. Delegación Tláhuac. Teléfono 840 07 12

2- Luis Hernández Barrera, 42 años, casado, 4º año de Ciencias y humanidades. Domicilio: calle Elisa #219-2 Nativitas. C.P. 3500

Otro domicilio: Lote 3, edificio G, departamento 202, unidad Bahía del Copal, San Juan Ixhuatepec. Municipio de Tlanepantla.

3.-Jesus Angel Huerta Cereso y/o Solís. 31 años, soltero, 4º semestre de vocacional.

Domicilio: Río Atenquillo 12-D. Col. Lomas de Lago. Estado de México.

Otro Domicilio: Olivares 264, Colonia Aquiles Serdán. Delegación Venustiano Carranza.

4.-Alfredo Totozintle Peña, 29 años, casado, primaria.

Domicilio: Fray Juan de Torquemada 59-302

Otro Domicilio: Fuente de Ermes #8-101, Fraccionamiento Fuentes del Valle. Tultitlán, Estado de México.

Policías "Testigos":

1. Raúl Sánchez Cedillo, 41 años, casado, 2º de secundaria.

Domicilio: calle de la sección 36, manzana 74, lote 19, colonia Río de la Luz, Ecatepec. Teléfono: 774 08 80

(Nota: lo dieron de baja por resultar positiva la prueba anti-doping)

2. Victor Manuel o Miguel Bautista Leal, 32 años, casado, secundaria.

Domicilio: Guerrero 65. Colonia El Chamizal, Ecatepec, Estado de México

Teléfono:466 91 55

(Nota: continúa en funciones)

FUNCIONARIOS.

Lic. Jorge Reza, secretario particular del Procurador. Tels. 133 76 29. 625 76 29. 27. 12 y fax 625 70 81

Subprocurador Jurídico. Lic. Gastón Villegas 625 78 95

Subprocurador Atención a Víctimas Lic. Hector Cárdenas San Martín. 133 72 09 y 133 71 84

Policía. Capitán Norberto Romero Gutierrez, jefe ayudantes secretario general.

242 50 06. 208 72 56

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Serapio Rendón 57 B. tels 566 78 54 y 535 68 92 y 546 82 17